

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS, EL GASTO Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE EJECUCIÓN DE CUATRO CONEXIONES EXTERIORES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS QUE DEN SERVICIO A LA SUBESTACIÓN STR TECNOLÓGICO DEL ÁMBITO DEL PP-2, CENTRO, DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN AUTOVÍA TOLEDO NORTE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEGANÉS (MADRID), EXPEDIENTE CS/02/2024

1. OBJETO

Es objeto de la presente resolución la emisión, por delegación del consejo de administración del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, de un acuerdo mediante el que se aprueben el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación, la autorización del gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato publico administrativo típico de servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al consorcio para la redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/02/2024, conforme a lo dispuesto en los artículos 117.1, 122.1 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. ANTECEDENTES

I.) El consorcio urbanístico denominado “PP-A del P.A.U.-2 [plan parcial de actuación del programa de actuación urbanística 2], Autovía Toledo Norte”, conocido como “Leganés Tecnológico”, fue constituido el día 20 de diciembre de 1999 con la misión de desarrollar, gestionar y ejecutar cooperativamente entre el Ayuntamiento de Leganés y la Administración de la Comunidad de Madrid el planeamiento urbanístico de los terrenos de uso industrial y terciario situados al noroeste del término municipal de Leganés lindantes con las carreteras M-425, M-40 y autovía de Toledo, en el ámbito del suelo urbanizable no programado denominado PAU-2, “Autovía de Toledo Norte”, del plan general de ordenación urbana de Leganés, a fin de implantar un parque industrial denominado “Leganés Tecnológico”.

El consorcio ostenta la condición de entidad de derecho público integrante del sector público institucional dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y goza de la consideración de Administración pública. Está constituido por el Ayuntamiento de Leganés y la

Administración de la Comunidad de Madrid, a la que está adscrito.

Conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) establecido en el Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, el consorcio constituye una unidad institucional residente a título de productor no de mercado controlado por las Administraciones públicas y ajeno a los fondos de la Seguridad Social, que está encuadrada en el sector institucional Administraciones públicas (S.13), subsector Administración regional (S.1312). A efectos de contratación pública, el consorcio tiene la consideración de poder adjudicador en la categoría de Administración pública conforme a lo dispuesto en los apartados 1.d), 2.b) y 3.a) del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Entre las actividades que constituyen el objeto del consorcio se encuentra llevar a cabo las obras de urbanización precisas en las áreas que tiene afectas conforme al destino previsto en los planes urbanísticos, tal como se dispone en el apartado E) artículo 5 de los estatutos.

La ordenación urbanística general del ámbito territorial de actuación del consorcio está constituida por el plan general de ordenación urbana de Leganés, revisado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22 de julio de 1999 (B.O.C.M. número 40, de 17 de febrero de 2000, suplemento). El instrumento específico de desarrollo urbanístico del área es el programa de actuación urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del plan general de ordenación urbana de Leganés, aprobado mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 28 de mayo de 2002 (B.O.C.M. número 174, de 24 de julio de 2002) y modificado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2013, por el que se aprueba definitivamente el plan de sectorización para modificación del programa de actuación urbanística PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del plan general de ordenación urbana de Leganés (B.O.C.M. número 157, de 4 de julio de 2013).

En el diseño del desarrollo urbanístico del área se diferencian tres ámbitos territoriales de actuación sucesiva: Sector 1 “Oeste”, Sector 2 “Centro” y Sector 3 “Este”.

La ordenación urbanística pormenorizada del ámbito al que se refiere el presente contrato está constituida por el plan parcial del Sector 2, Centro, del plan de sectorización Autovía de Toledo Norte, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés con fecha 29 de enero de 2015 (B.O.C.M. número 77, de 1 de abril de 2015). El planeamiento urbanístico prevé como sistema de ejecución del ámbito la expropiación, por lo que el día 30 de enero de 2020 la Comisión de Urbanismo de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de delimitación y expropiación del ámbito (B.O.C.M. número 46, de 24 de febrero de 2020). El proyecto

de parcelación fue aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de octubre de 2022; dentro del mismo se localiza la parcela STR, con 1.600 m2 de superficie y 1.120 m2 de edificabilidad, destinada a la construcción de una subestación eléctrica que habrá de ser llamada “STR Tecnológico”.

El proyecto de urbanización del Sector 2, Centro, se encuentra en trámite de aprobación. Tras sendas aprobaciones iniciales acordadas por la Junta de Gobierno Local los días 29 de mayo de 2012 (B.O.C.M. número 184, de 3 de agosto de 2012) y 10 de febrero de 2015 (B.O.C.M. número 58, de 10 de marzo de 2015), en el año 2022 el consorcio promovió su última modificación para incluir una conexión exterior con el ámbito territorial del programa de actuación urbanística “Leganés Norte” e introducir algunas adaptaciones de las acometidas de servicios a la parcelación aprobada el 13 de octubre de 2022, de las redes de alumbrado a la tecnología led y de la gestión de espacios naturales a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este nuevo proyecto de urbanización ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de agosto de 2022 (B.O.C.M. número 214, de 8 de septiembre de 2022), iniciándose nuevos trámites de información pública e informes sectoriales.

En este marco, el día 7 de julio de 2023 la empresa distribuidora de energía eléctrica ha emitido un informe (fechado a 30 de junio de 2023) formulando unas condiciones de conformidad técnica que demandan que el promotor de la urbanización lleve a cabo directamente todas las actuaciones de extensión de la red, esto es, la construcción de la subestación eléctrica STR Tecnológico más sus conexiones a 15kV de tensión con las subestaciones STR Aguacate, de Carabanchel, y STR Parque de Ingenieros, de Villaverde, y a 45kV con las subestaciones STR Polígono C, de Aluche, y STR La Fortuna, de Leganés.

II.) Considerando que el cumplimiento de las condiciones impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica requiere que el consorcio lleve a cabo directamente la construcción de la subestación eléctrica y las cuatro nuevas conexiones exteriores y que para ello es necesario como paso previo proceder a la redacción y tramitación administrativa de los correspondientes proyectos urbanísticos y constructivos, el día 23 de mayo de 2024 el consejo de administración del consorcio, a propuesta del director-gerente, acordó por unanimidad incoar un procedimiento de contratación pública administrativa típica de servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística al consorcio para la redacción del proyecto constructivo de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), por procedimiento abierto ordinario, dando lugar al expediente CS/02/2024. Al propio

tiempo, el órgano de contratación delegó de forma mancomunada en el vocal en representación de la Comunidad de Madrid competente en materia de consorcios urbanísticos, Director General de Suelo, y el vocal en representación del Ayuntamiento de Leganés que se determinase, la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación, el gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, y facultó al director-gerente para tramitar los procedimientos de contratación y de adjudicación, previendo que esta se acuerde en su momento por el consejo de administración.

El día 5 de julio de 2024, el director-gerente, en cumplimiento de un mandato expreso del consejo de administración al tiempo de incoación del procedimiento, solicitó de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, conforme al convenio de asistencia jurídica de 20 de junio de 2024 con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2024, la emisión de informe a una propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación que había sido elaborado, conforme a lo regulado en el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, en colaboración con los servicios técnicos de la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

El día 26 de julio de 2024, la Letrada de la Comunidad de Madrid encargada del caso, junto con el Letrado Jefe de la Subdirección General de Asistencia Jurídica Convencional, Asuntos Constitucionales y Estudios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, emitieron informe favorable A.J.C. 109/2024, si bien condicionando el sentido del mismo a la observancia de cuatro consideraciones de carácter esencial y poniendo de relieve varias observaciones adicionales de mejora tanto del pliego como de la documentación justificativa del procedimiento. En consecuencia, se ha modificado en lo pertinente la redacción de las propuestas iniciales para incorporar al pliego definitivo de cláusulas administrativas particulares las adaptaciones requeridas por las consideraciones esenciales del informe jurídico y la mayor parte de las observaciones de mejora puestas de relieve en el mismo, en los términos que se explican más adelante.

3. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

El análisis del expediente de contratación muestra que la tramitación del procedimiento se ha desarrollado conforme a la ley sin incidencias reseñables, lo que permite pasar a la fase de adjudicación del contrato mediante la convocatoria de la correspondiente licitación. Obran en el expediente de contratación los siguientes documentos:

- Memoria explicativa de la necesidad e idoneidad de la contratación y otros aspectos de oportunidad del procedimiento, emitida por el director-gerente del consorcio el día 13 de mayo de 2024 con objeto de justificar la legalidad y oportunidad de la incoación del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 73.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en relación con el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Certificación de la secretaria del consejo de administración acreditativa del acuerdo de 23 de mayo de 2024 de incoación del procedimiento de contratación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116.1 de la ley y 73.1 del reglamento.

- Memoria complementaria de la contratación, emitida por el director-gerente el día 5 de julio de 2024 con objeto de justificar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de determinadas decisiones de oportunidad distintas de las acordadas por el órgano de contratación al tiempo de la incoación del procedimiento.

- Propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación remitido para informe jurídico, firmado a efectos de identificación por el director-gerente el día 5 de julio de 2024.

- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 109/2024 sobre la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, emitido por la Letrada de la Comunidad de Madrid doña Marta Aguirre Pellín y el Letrado Jefe de la Subdirección General de Asistencia Jurídica Convencional, Asuntos Constitucionales y Estudios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el día 26 de julio de 2024, documento preceptivo por aplicación supletoria del artículo 122.7 de la ley.

- Propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación adaptado al informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que se somete a la aprobación del consejo de administración, firmado a efectos identificativos por el director-gerente el día 6 de septiembre de 2024.

- Propuesta de pliego de prescripciones técnicas particulares de la ejecución del contrato que se somete a la aprobación del consejo de administración, coincidente con el firmado para incoación de la contratación por el director-gerente del consorcio el día 13 de mayo de 2024, pues no ha sido preciso modificarlo a resultados del informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

- Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los compromisos económicos del consorcio por razón de la contratación, por importe máximo de 181.500 € (I.V.A. incluido), emitido por el director-gerente el día 6 de septiembre de 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 116.3 de la ley.

4. MODIFICACIÓN DE ALGUNAS DECISIONES DE OPORTUNIDAD ACORDADAS AL INCOAR EL PROCEDIMIENTO

En el acuerdo de incoación del procedimiento de 23 de mayo de 2024, que tomó como base una propuesta previa del director-gerente de 13 de mayo de 2024, el consejo de administración estableció con precisión determinadas condiciones de la contratación y del propio contrato, conforme al principio de gobernanza que propugna que todas las decisiones de oportunidad asociadas a una contratación sean acordadas por el órgano competente para contratar.

Sin embargo, durante el proceso de elaboración del pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, realizado en colaboración con los servicios técnicos de la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Comunidad de Madrid, se ha advertido, de una parte, que se cometió un error en la determinación de la valoración de los criterios relacionados con la calidad, infringiendo con ello el ordenamiento jurídico, y, de otra parte, que el sistema de valoración del precio de las ofertas devolvía resultados paradójicos en supuestos relativamente comunes, lo que aconsejaba variarlo para evitar dificultades de aplicación.

Estas circunstancias hicieron que se incorporara a la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares que se sometió a informe jurídico, determinadas decisiones de oportunidad que variaban lo propuesto en su momento por el director-gerente y acordado por el órgano de contratación, para que la Abogacía General pudiera revisar su legalidad formal y material antes de la aprobación del pliego por el órgano de contratación. Por otra parte, dado que en la incoación del procedimiento se aplicaron las mejores prácticas de gobernanza que desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se han ido poniendo de relieve en sucesivos informes emitidos respecto de contrataciones similares de consorcios urbanísticos durante los últimos años, se incorporaron al pliego las observaciones que se consideraron aplicables a esta contratación de las contenidas en los informes A.J.C. 91/2024 y 94/2024, emitidos con posterioridad a la incoación de este procedimiento pero antes de que se solicitara el informe jurídico del pliego de la contratación.

La variación principal del pliego respecto de lo acordado por el órgano de contratación al tiempo de la incoación del procedimiento afecta a la valoración a

efectos de adjudicación de los criterios económicos relacionados con costes, a los que en la propuesta de incoación se atribuía el 51% de la ponderación, y los criterios relacionados con la calidad (cualitativos evaluables de forma automática y cualitativos cuya cuantificación depende de juicio valor), a los que se atribuía el 49%. Con este diseño, que respondió más a un lapsus que a una decisión consciente, se incumplía lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a que en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad representen como mínimo el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. Para resolver este error, se modificó el sistema de valoración en el apartado 9 de la cláusula 1 del pliego, asignando a los criterios económicos relacionados con costes una ponderación del 49% (que no requiere modificar la fórmula de valoración del precio de las ofertas), y atribuyendo a los criterios relacionados con la calidad una ponderación del 51%, para lo que se incrementó la valoración máxima del criterio cualitativo evaluable de forma automática referido a la experiencia del especialista en diseño de redes e instalaciones eléctricas por encima del mínimo previsto como requisito adicional de solvencia conforme al artículo 76.2 de la ley; esta modificación conllevó un cambio correlativo del umbral de corte de la fase eliminatoria del procedimiento de adjudicación (apartado 9.4), para ajustarlo a un valor que representase la mitad de la ponderación máxima de los criterios relacionados con la calidad.

La otra modificación de importancia en el pliego afecta a la valoración del precio de las ofertas, que en la propuesta de incoación se había diseñado sobre la base de la aplicación de dos fórmulas matemáticas diferenciadas en función de si el precio ofertado fuese superior o inferior a la media aritmética de los precios de todas las ofertas admitidas a la licitación. Con ello se pretendía establecer una cautela frente a ofertas anormalmente bajas, a cuyo efecto las fórmulas de aplicación daban lugar a dos pendientes de puntuación diferenciadas, más vertical para las ofertas por debajo de la media y más suave para las que estuviesen por encima, buscando con ello mermar la ponderación de ofertas de muy bajo precio que pudieran comprometer la calidad del trabajo. Sin embargo, ya al tiempo de la incoación se detectó que el sistema devolvería un resultado anómalo si se presentara únicamente un licitador (el divisor de la fórmula tendría el valor cero y por tanto el resultado sería matemáticamente indeterminado), por lo que se estableció una excepción para poder aplicar la máxima puntuación en este caso. Ahora bien, al tiempo de elaborar el pliego se constató que también se produciría un resultado anómalo en los supuestos en que se presentasen dos licitadores (un céntimo de euro de diferencia de precio implicaría cinco puntos de diferencia de valoración). Dadas estas circunstancias, se cambió la fórmula de valoración del precio inicialmente prevista, por una función sencilla de interpolación lineal entre el presupuesto base de licitación y la oferta de menor importe, corregida

por el escalado a la raíz sexta para crear una función radical continua de pendiente variable, solución que permite igualmente limitar de forma objetiva la relevancia cuantitativa de las bajas, pero con la ventaja de que se utiliza una sola fórmula para todos los supuestos, sin reglas particulares ni excepciones.

Por lo que se refiere a la adaptación a los criterios de gobernanza puestos de manifiesto en los informes A.J.C. 91/2024 y 94/2024, se incorporaron al pliego las observaciones de mejora referentes a la eliminación de las explicaciones relativas a la naturaleza jurídica del consorcio (apartado 1 de la cláusula 1) y la justificación de la clasificación, los criterios de solvencia y restantes apartados de contenido justificativo o aclaratorio del apartado 7, asumiendo la consideración de que tal información debería incluirse exclusivamente, en puridad, dentro de la documentación preparatoria del contrato. Igualmente se precisó el contenido de la documentación no obligatoria que los licitadores pueden presentar con sus proposiciones (apartado 10) y se resolvió una ambigüedad en el procedimiento de imposición de penalidades, mejorando la redacción de alguna de ellas y suprimiendo, de oficio, una relativa a la información sobre accidentes que se había incluido por error ya que no tenía cabida en el objeto del contrato (apartado 21). No obstante, no se incorporaron, por premura de tiempo, dos observaciones de mejora del informe A.J.C. 94/2024 que se incluyen ahora en el pliego definitivo.

5. ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN AL INFORME JURÍDICO

En el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 109/2024 sobre la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, se pusieron de manifiesto hasta cuatro consideraciones esenciales a las que se condicionaba el sentido favorable del informe, junto con varias observaciones de mejora a estimar en su caso. Todas las consideraciones esenciales del informe jurídico han sido atendidas, en los términos que se expresa a continuación, si bien de las observaciones de mejora puestas de relieve en el mismo se ha atendido a todas salvo dos, por los motivos que para cada caso se explican. Asimismo, se incluye explicación de la inclusión de oficio en el pliego definitivo de una observación de mejora puesta de relieve en el informe A.J.C. 109/2024, referente a otra contratación muy similar de este mismo consorcio, más dos observaciones de mejora del informe A.J.C. 94/2024, relativo al pliego de un contrato de servicios de otro consorcio, cuya inclusión en el pliego de la contratación se entiende conveniente para la gobernanza del organismo.

Finalmente, se ha actualizado en el pliego la previsión de financiación por años de las obligaciones económicas del consorcio dimanantes de la contratación, para

adaptarlas a una previsión de inicio de la ejecución del contrato el día 1 de diciembre de 2024.

I.) Las cuatro consideraciones de carácter esencial del informe A.J.C. 109/2024 fueron las siguientes:

- Primera. No se había incluido en el pliego el valor estimado completo del contrato porque se omitía el coste de la prórroga prevista para el caso de que la tramitación de permisos, autorizaciones y conformidades de los proyectos se demore más allá de lo inicialmente estimado (apartado 4 de la cláusula 1 del pliego): *«La cláusula 1.4 al describir el método de cálculo del valor estimado, parece referirse al presupuesto base de licitación. No obstante, el apartado 7.1 de la propuesta razonada del contrato establece que el valor estimado del contrato, ha sido determinado por el importe total de las prestaciones durante la duración de este, incluidas sus posibles prórrogas y asciende a 150.000 €. En el apartado analizado, se consigna un valor estimado del contrato de 150.000 euros, esto es, el importe de la base imponible, por lo que no se habría tenido en cuenta en el mismo la posibilidad de prórroga prevista en el apartado 18 de la cláusula 1 por un año adicional al año de duración inicial. No hay alusión alguna a las modificaciones al no estar previstas en la cláusula 22 del PCAP. / Debiera corregirse, incluyendo el posible año de prórroga, en los términos exigido en el artículo 101.2 a) de la LCSP (“Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato”) sin perjuicio de lo que señalaremos con posterioridad en cuanto a la prórroga del contrato. / Esta consideración tiene carácter esencial / No obstante, lo anterior, de la explicación recogida en el apartado 6 de la propuesta memoria, parece que lo que se pretende es dar cobertura al contrato hasta la obtención de la correspondiente autorización administrativa, que determinaría el fin del servicio contratado. Así dice la memoria: “...La previsión de prórroga deviene de la posibilidad de que la tramitación de permisos, autorizaciones y conformidades se demore más allá de lo previsto...” A estos efectos, parece que la solución más adecuada sería configurar la duración teniendo en cuenta dicho término. Es decir, desde la formalización del contrato hasta que concluya la tramitación del proyecto con la correspondiente autorización, sin que la duración total pueda exceder de 27 meses»* (págs. 17 y 18, A.J.C. 109/2024).
- La propuesta inicial de pliego, considerando la posibilidad de que el tiempo necesario para la tramitación administrativa de cada proyecto constructivo en orden a la conformidad técnica de la empresa distribuidora de la energía eléctrica, las autorizaciones sectoriales que procedan y la autorización sustantiva de la Dirección General de

Transición Energética y Economía Circular fuese superior a los doce meses inicialmente estimados, previó la posibilidad de prorrogar el contrato si el plazo de ejecución inicial no bastara para obtener las autorizaciones necesarias, ya que estos procedimientos se rigen por diferente normativa sectorial que establece unos plazos de tramitación respecto de cuyo cumplimiento son ajenos tanto el contratista como el consorcio.

- Esta consideración de carácter esencial se ha atendido, conforme a la sugerencia contenida en la página 28 del propio informe A.J.C. 109/2024, (*«El apartado 18 de la cláusula 1 determina la duración del contrato y la previsión de prórroga. La previsión de un año de prórroga obedece, exclusivamente, a la posibilidad de que la tramitación de permisos, autorizaciones y conformidades se demore más allá de lo previsto. Como anticipábamos, podría configurarse la duración del servicio de consultoría en atención a la obtención de los permisos autorizaciones y conformidades necesarias, poniendo un límite máximo de duración. Esta configuración parece más acorde con la forma de pago prevista en el apartado 24 de la cláusula 1, coincidiendo el último pago (15% del precio) con la autorización definitiva del proyecto por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular»*), eliminando la regulación de este supuesto como prórroga contractual y determinando el plazo de ejecución del contrato en un valor que comprende el tiempo máximo de ampliación previsto en el pliego inicial; es decir, en lugar de quince meses de plazo y doce de prórroga, veintisiete meses de plazo. Esta solución, por tanto, implica variar la regulación del plazo contractual (apartado 18 de la cláusula 1), sin variación de la cláusula relativa al valor estimado del contrato.
- Segunda. El pliego establecía un supuesto excepcional de ampliación por tiempo indeterminado de la prórroga contractual prevista (apartado 18 de la cláusula 1), que podría dar lugar a incumplir los límites de duración de los contratos establecidos en la ley: *«Además de la previsión de la prórroga de 1 año, se señala que “con el fin de limitar al máximo la posibilidad de que el buen fin del contrato se frustre por demoras extraordinarias de esos organismos, en el supuesto de que la prórroga del contrato excediera del plazo máximo previsto sin que la tramitación administrativa del proyecto constructivo hubiera concluido por causas ajenas al contratista, ambas partes tendrán opción de resolver el contrato o ampliar de mutuo acuerdo el período de prórroga sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de conceder ampliación del plazo de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley de*

Contratos del Sector Público”. Como se observa, se contempla una previsión de ampliación de la prórroga establecida, pero sin límite temporal prefijado, lo que además de dotar al contrato de una posible nueva prórroga indeterminada, podría colisionar con el plazo máximo que para este tipo de contratos prevé el artículo 29.4 de la LCSP. / Esta consideración tiene carácter esencial» (págs. 28 y 29, A.J.C. 109/2024).

- La propuesta inicial de pliego, además de prever la posibilidad de prorrogar por hasta doce meses el contrato si su plazo de ejecución inicial de quince meses no bastara para obtener todos los permisos, autorizaciones y conformidades necesarios, estableció un supuesto de latencia indefinida del contrato destinada a solucionar la situación extrema que se daría en el caso de que ni siquiera tras el transcurso de la prórroga máxima se hubieran completado estos trámites, buscando de esta manera evitar la eventualidad de que el buen fin del contrato se frustrase por demoras extraordinarias de esos organismos.
- En el informe A.J.C. 109/2024 se pone de relieve que este diseño implica dotar al contrato de una posible prórroga indeterminada que podría colisionar con el plazo máximo de duración de cinco años establecido en el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos de servicios de prestación sucesiva. Considerando que, del mismo modo en que no es correcta la previsión de prórroga por los motivos expresados al analizar la consideración esencial anterior, tampoco es correcto prever una ampliación de dicha prórroga, esta consideración esencial se ha atendido suprimiendo en el pliego definitivo tanto la previsión de prórroga como su ampliación.
- Tercera. El pliego incurría en contradicción en la determinación de las consecuencias jurídicas del incumplimiento por el contratista del compromiso de ejecutar el contrato con el personal que haya adscrito, por cuanto que lo configuraba simultáneamente como causa de resolución del contrato (apartado 7.C de la cláusula 1) y como supuesto de imposición de penalidades por ejecución defectuosa grave (apartado 21.III): *«Entre las penalidades «Por ejecución defectuosa del contrato» se configura como supuesto de ejecución defectuosa grave el de “Prestar el servicio con intervención de personal que carezca de la titulación, colegiación o habilitación profesional que resulte exigible en función de la tarea a realizar” y “Sustituir sin la previa autorización del responsable del contrato, a cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo adscrito a la ejecución.”. Sin embargo, en el apartado 7.C de esta misma cláusula 1 se configura el compromiso de adscripción de medios personales*

como obligación esencial, exigiendo que dicho personal ostente determinada titulación, colegiación y previendo la necesaria autorización del responsable del contrato en caso de sustitución, advirtiendo expresamente que “Debido a su trascendencia para el buen fin del contrato, esta adscripción de medios tiene el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento es causa de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 211.1.f) de la LCSP”. Por tanto, deben coordinarse ambas previsiones. / Esta consideración tiene carácter esencial» (pág. 30, A.J.C. 109/2024).

- La propuesta inicial de pliego contenía efectivamente el error puesto de manifiesto en el informe de la Abogacía General, lo que suponía vulnerar el carácter alternativo (penalidad o resolución) de las consecuencias jurídicas del incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato medios personales o materiales, que se establece en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, párrafo 1º, inciso final.
- Esta consideración de carácter esencial se ha atendido suprimiendo en el pliego definitivo la imposición de penalidades en los supuestos indicados, optando por la resolución del contrato en el caso de incumplimiento del compromiso.
- **Cuarta.** El pliego no regulaba con la claridad debida los supuestos de imposición de penalidades por ejecución defectuosa relativos al incumplimiento por el contratista de requerimientos previos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones (apartado 21.III de la cláusula 1): *«Como supuesto de penalidades por ejecución defectuosa muy grave se consigna la consistente en “incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones, siempre que hubiera mediado por lo menos un requerimiento previo instando el debido cumplimiento y persistiera el incumplimiento tras el término de subsanación”. Debiera aclararse, en aras a la seguridad jurídica, debiendo diferenciarse de la consistente en “Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como ejecución defectuosa grave o por tercera vez en uno susceptible de calificación como leve; la imposición de penalidad por reiteración excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad.” Teniendo en cuenta que “Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones” es calificado también como leve o grave en atención a que haya o no premura. / Esta consideración tiene carácter esencial» (pág. 31, A.J.C. 109/2024).*

- La propuesta inicial de pliego regulaba de forma autónoma el supuesto de resistencia del contratista a cumplimentar los requerimientos que le haga el responsable del contrato para que implemente correcciones en la ejecución de las prestaciones (esto es, cuando se le haya requerido de subsanación, deje pasar el plazo concedido sin llevarla a cabo, se le requiera una segunda vez y deje de nuevo pasar el plazo), configurándolo como un caso de ejecución defectuosa muy grave del contrato. Ahora bien, a la vista del informe de la Abogacía General, parece claro que el tratamiento singularizado de este supuesto distorsiona el sistema general de imposición de penalidades sin que sea necesario, por cuanto que el incumplimiento o demora de un requerimiento urgente es un caso de ejecución defectuosa grave del contrato, por lo que un segundo incumplimiento del requerimiento daría lugar a la imposición de penalidades por ejecución defectuosa muy grave, a título de reiteración de dos incumplimientos graves. Por lo demás, también parece más lógico en términos de gobernanza que la respuesta ante una eventual resistencia del contratista sea lo más progresiva posible, para evitar disfunciones en la ejecución del contrato.
- Esta consideración de carácter esencial se ha atendido suprimiendo en el pliego definitivo como causa de imposición de penalidad muy grave el supuesto autónomo de resistencia del contratista a los requerimientos del responsable del contrato.

II.) Las observaciones de mejora puestas de relieve en el informe A.J.C. 109/2024 que han sido incorporadas al pliego definitivo, son las siguientes:

- Especificar si el requisito de inscripción en colegio profesional de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato (apartado 7.C de la cláusula 1) se extiende o no a los casos en que la titulación no sea específicamente la de Ingeniero Industrial o Ingeniero de Caminos, sino otra titulación superior de máster con atribuciones profesionales equivalentes en la materia (pág. 19, A.J.C. 109/2024). Esta observación se ha atendido precisando en el pliego definitivo que se requiere la colegiación en todo caso, con independencia de que sea o no obligatoria para el ejercicio de profesión, ya que se estima que la sujeción de los profesionales a la disciplina colegial constituye una garantía adicional de la calidad de los proyectos que se redacten.
- Rectificar un error en la identificación de la tipología del procedimiento de adjudicación del contrato (apartado 8 de la cláusula 1) por cuanto que se menciona el procedimiento abierto simplificado, cuando de antecedentes se deduce que el procedimiento aplicable es el abierto ordinario (pág. 19, A.J.C.

109/2024). Esta observación se ha atendido rectificando dicho error en el pliego definitivo.

- Precisar el importe mínimo de los proyectos valorables para la aplicación del criterio de adjudicación cualitativo evaluable de forma automática referente a la experiencia adicional del autor del proyecto (apartado 9.2.A de la cláusula 1), que debería coincidir con el mínimo establecido como requisito de solvencia (pág. 27, A.J.C. 109/2024). Esta observación se ha atendido precisando en el pliego definitivo ese importe mínimo en dicha cuantía.
- Especificar que el programa de trabajos que haya de presentar el contratista (apartado 17 de la cláusula 1) no puede variar esencialmente el contenido del programa de trabajo ofertado por el mismo licitador, dado que en otro caso se variaría la oferta de dicho licitador (pág. 28, A.J.C. 109/2024). Esta observación se ha atendido precisando en el pliego definitivo que el programa de trabajo que haya de presentar el contratista en los primeros quince días naturales de ejecución del contrato, habrá de ser coherente con el contenido del programa ofertado en la licitación.
- Precisar el alcance del supuesto de imposición de penalidades por ejecución defectuosa grave consistente en prestar el servicio con intervención de negligencia que cause perjuicio grave al consorcio (apartado 21.III de la cláusula 1), ya que su imprecisión podría vulnerar los principios de tipicidad y proporcionalidad (pág. 31, A.J.C. 109/2024). Esta observación se ha atendido sustituyendo el tipo por “Prestar el servicio con intervención de negligencia grave que cause perjuicio al consorcio”, que se estima acorde a los indicados principios de tipicidad (los conceptos de negligencia grave y causación de perjuicio son conceptos jurídicos indeterminados usuales en el tráfico) y proporcionalidad (solo la negligencia grave da lugar a ejecución defectuosa grave a efectos de penalidades). Por los mismos motivos de indeterminación respecto de la calificación como graves de los posibles perjuicios que el contratista pueda causar al consorcio, se ha suprimido también la calificación de la gravedad de los perjuicios en la tipificación del supuesto de ejecución defectuosa muy grave consistente en prestar el servicio con intervención de inhibición, incumplimiento doloso de normas técnicas imperativas, fraude, deslealtad o abuso de confianza que cause perjuicio al consorcio.

III.) Igualmente se incorpora al expediente la atención de una observación de mejora del informe A.J.C. 109/2024 que no requiere modificar el pliego definitivo, sino ampliar la justificación de la memoria de la contratación, en los siguientes términos:

- Justificar específicamente que el contrato de gestión integral celebrado para el funcionamiento ordinario del consorcio el día 13 de diciembre de 2012 y

modificado el día 3 de noviembre de 2016 con la que hoy en día es la empresa pública de la Comunidad de Madrid Planifica Madrid Proyectos y Obras, M.P., S.A., no incluye prestaciones que concurran con el objeto de este contrato (págs. 7 y 8, A.J.C. 109/2024). Se amplía el párrafo correspondiente del informe justificativo de la insuficiencia de medios propios del consorcio para la ejecución del contrato incluido en la incoación del procedimiento (apartado 3, párrafo 2º), que queda así:

«En la actualidad, los medios personales del consorcio se limitan a los miembros del consejo de administración, cuya dedicación forzosamente ha de ser parcial dada la posición institucional de estas personas, no disponiendo adicionalmente de personal contratado alguno. Para atender al funcionamiento ordinario del organismo, el día 13 de diciembre de 2012 el consorcio celebró un contrato de gestión integral, modificado el día 3 de noviembre de 2016, con la que hoy en día es la empresa pública de la Comunidad de Madrid Planifica Madrid Proyectos y Obras, M.P., S.A. Este contrato de gestión integral incluye, además de la gerencia del consorcio, las labores administrativas y de gestión del proyecto y de dirección y supervisión técnica de todas las actividades del organismo, asumiendo su control técnico, administrativo, jurídico y económico, pero excluyendo expresamente la redacción de determinados documentos técnicos específicos, tales como los proyectos urbanísticos o constructivos de obras. A tal efecto, en el apartado 2 (contenido de los trabajos) de la propuesta de encomienda de servicios a la que remite a efectos de determinación de su objeto la cláusula primera del contrato, se dispone expresamente que “Los trabajos a realizar se concretarán tanto en labores administrativas y de gestión del proyecto, como en la dirección y supervisión técnica de todas sus actividades, asumiendo el control técnico, administrativo, jurídico y económico del Consorcio, en las sucesivas etapas de tratamiento del suelo con el apoyo de las eventuales modificaciones de planeamiento, proyecto de urbanización, ejecución de obras, enajenación de parcelas, etc., de las que, los documentos técnicos específicos (proyecto de urbanización, Dirección Facultativa de las obras, Proyecto de parcelación, etc.) serán objeto de contratación independiente con terceros por el propio Consorcio”».

IV.) No se han atendido dos observaciones del informe A.J.C. 109/2024 porque se estima que no supondrían una mejora del pliego, debido a las circunstancias que para cada caso se expresan:

- Incluir en la cláusula 2, reguladora del régimen jurídico del contrato, la mención del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 2018, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. número 116, de 16 de mayo de 2018), a título de normativa plenamente aplicable al consorcio (pág. 4, A.J.C. 109/2024). Esta observación, relativamente frecuente en los informes de la Abogacía General a los pliegos de otras contrataciones administrativas típicas (v.g., A.J.C. 28/2021, 53/2022, 57/2022, 118/2022, 47/2023, 56/2023, 82/2024, 91/2024, 94/2024, 104/2024 y 108/2024), no se ha atendido por considerar que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2018 no contiene norma jurídica alguna (si así fuese, habría de revestir la forma de «Decreto» y no la de «Acuerdo», por aplicación del artículo 50.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid), sino unas simples instrucciones de gestión que, como manifestación de potestad jerárquica y no de potestad reglamentaria (artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), son de aplicación en la Administración de adscripción (la Comunidad de Madrid), pero no en el consorcio, cuyo sometimiento a estas instrucciones es puramente voluntario y se decide por el consejo de administración caso por caso al determinar las condiciones de cada contratación. Por ello, no se estima conveniente incluir la mención de estas instrucciones en la regulación general del régimen jurídico del contrato puesto que carecen de la condición de norma jurídica y nunca, ni siquiera como instrucciones, serían de obligado cumplimiento para los terceros interesados en la contratación.
- Establecer en la aplicación del criterio de adjudicación económico relacionado con costes referente a la oferta económica (apartado 9.1 de la cláusula 1), un mecanismo que impida que los licitadores conozcan con antelación los puntos en que cambia la pendiente de valoración (pág. 27, A.J.C. 109/2024). Esta observación no se ha atendido porque parece responder al sistema de valoración del precio ofertado que se había previsto inicialmente al tiempo de la incoación del procedimiento, el cual fue sustituido en el pliego que se remitió a informe de la Abogacía General por una fórmula de función radical continua de pendiente variable que ya no plantea ese problema, conforme se explica en la memoria complementaria de la contratación de 7 de julio de 2024 que se remitió junto con el pliego para informe jurídico.

V.) Finalmente, se han incorporado de oficio al pliego definitivo las tres siguientes observaciones de mejora puestas de relieve en los informes A.J.C. 94/2024 y

108/2024, relativas igualmente a contratos de servicios y cuya inclusión en la regulación de la contratación se entiende conveniente por motivos de gobernanza:

- Revisar las condiciones impuestas para la sustitución del personal adscrito a la ejecución del contrato (apartado 7.C de la cláusula 1) porque pudieran considerarse demasiado restrictivas, ya que podrían suponer la imposibilidad para el contratista de continuar ejecutando el contrato a pesar de que disponga y pueda adscribir a la ejecución a profesionales con el mismo nivel de titulación y experiencia requeridos, y podrían además afectar de forma indirecta a las expectativas profesionales del profesional que hubiese de ser sustituido, regulación que resulta además contradictoria con la flexibilidad con que el pliego permite la subcontratación (págs. 21 y 22, A.J.C. 94/2024); se ha atendido ampliando en el pliego definitivo los supuestos de sustitución con los sugeridos en el informe jurídico.
- Determinar en el pliego (apartado 21 de la cláusula 1) un procedimiento sencillo para la tramitación de los expedientes de imposición de penalidades, garantizando en todo caso la audiencia al contratista (pág. 32, A.J.C. 94/2024); se ha atendido incluyendo en el pliego definitivo un sencillo procedimiento con las menciones mínimas necesarias para orientar la gestión y evitar errores: propuesta de resolución del responsable del contrato con sujeción a determinados criterios materiales, audiencia del contratista y resolución del órgano de contratación, remitiéndose en lo demás al procedimiento legalmente establecido (artículos 191 y 194.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y 97 a 99 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), pero no se ha establecido un mayor nivel de precisión porque se entiende que el diseño de un procedimiento específico completo, además de innecesario, plantearía el problema añadido de regular una cuestión de orden público, como es el procedimiento de emisión de los actos administrativos, mediante un instrumento convencional como es un documento contractual, en lugar de acudir a las fuentes del Derecho comunes, que en todo caso resultarían de aplicación imperativa con independencia de lo que el pliego pudiera establecer.
- Especificar el carácter excepcional de las modificaciones contractuales no previstas en el pliego (apartado 22 de la cláusula 1), pues tal es el carácter que se les da en el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público (pág. 27, A.J.C. 108/2024). Esta observación se ha atendido precisando en el pliego definitivo el carácter excepcional de ese tipo de modificaciones.

6. TÍTULO COMPETENCIAL

Una vez que ha concluido la instrucción del procedimiento de contratación de los servicios de redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/02/2024, procede la emisión de una resolución por la que se aprueben los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación y la autorización del gasto, y se disponga la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato.

A tal efecto, el día 6 de septiembre de 2024 el director-gerente del consorcio, actuando en ejercicio de la función de gestionar la ejecución de todos los asuntos encomendados por el consejo de administración, que se atribuye al director-gerente en el artículo 16.D de los estatutos, formuló propuesta razonada de aprobación de pliegos, expediente y gasto y de apertura de la licitación, cuyos razonamientos se incorporan al presente acto administrativo.

La potestad de aprobar los pliegos tanto de cláusulas administrativas particulares cuanto de prescripciones técnicas particulares de la contratación corresponde al órgano de contratación conforme a los artículos 122.5 y 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente, siendo igualmente de la competencia del órgano de contratación la aprobación del expediente, que en el presente caso implica la aprobación de la fase de autorización del proceso de gasto correspondiente, así como la apertura del procedimiento de adjudicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1 de la misma ley.

El órgano de contratación del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico es el consejo de administración como órgano superior al que corresponde con carácter general el ejercicio de todas las funciones y competencias del consorcio que no estén atribuidas al presidente o delegadas en el consejo de dirección y las ordinariamente gestoras que correspondan al director-gerente, que se le atribuye en el artículo 11 de los estatutos. No obstante, el órgano de contratación puede acordar otras delegaciones del ejercicio de sus competencias en la forma y medida que considere oportunas para el servicio de los intereses generales.

De este modo, los actos antedichos se emiten en el presente caso en ejercicio de la delegación específica acordada por el consejo de administración al tiempo de la incoación del procedimiento el día 23 de mayo de 2024 en los siguientes términos: *«Delegar de forma mancomunada en el vocal en representación de la Comunidad de Madrid competente en materia de consorcios urbanísticos, Director General de Suelo, y el vocal en representación del Ayuntamiento de Leganés que se determine, la*

aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación, el gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato», habiéndose designado en la propia sesión a don Francisco Javier Oporto Martín como vocal en representación del Ayuntamiento de Leganés.

Conforme a lo expuesto, actuando en ejercicio de la delegación acordada por el consejo de administración y a propuesta del director-gerente, emitimos de consuno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación por el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de los servicios de redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid).

SEGUNDO. Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de regir la realización para el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de los servicios de redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid).

TERCERO. Aprobar el expediente CS/02/2024, de contratación pública administrativa típica de los servicios de consultoría y asistencia técnica y urbanística para la redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid).

CUARTO. Aprobar la autorización de un gasto por importe de ciento ochenta y un mil quinientos euros (181.500 €), impuesto sobre el valor añadido incluido, destinado a financiar las obligaciones económicas que resulten para el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico de la contratación de los servicios de redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid).

QUINTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios

de redacción de los proyectos constructivos de ejecución de cuatro conexiones exteriores eléctricas subterráneas que den servicio a la subestación STR Tecnológico del ámbito del PP-2, Centro, del plan de sectorización Autovía Toledo Norte del plan general de ordenación urbana de Leganés (Madrid), expediente CS/02/2024, concediéndose plazo para la presentación de ofertas no inferior a quince días naturales.

SEXTO. Dar cuenta de esta resolución al consejo de administración en la siguiente sesión que se celebre.

El presente acuerdo se considera dictado por el consejo de administración del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pone fin a la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos 2 y 25 de los estatutos del consorcio, y frente al mismo cabe interponer recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, conforme a lo dispuesto en los apartados 1.a) y 2.a) del artículo 44 y el apartado 1.d) del artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el apartado Cinco.1.a) del artículo 3 de la Ley de la Asamblea de Madrid 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid y Leganés, a fecha de la última firma

EL VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y DELEGADO

Firmado por EL VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ***8026**
Fecha: 2024.09.14 16:36



Fdo.: Ramón Cubián Martínez,
Director General de Suelo

EL VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS Y DELEGADO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La autenticidad de este
Firmado por OPORTO MARTIN FRANCISCO
JAVIER - DNI ***0978** el día
13/09/2024 con un certificado emitido
por AC Sector Público

Fdo.: Francisco Javier Oporto Martín